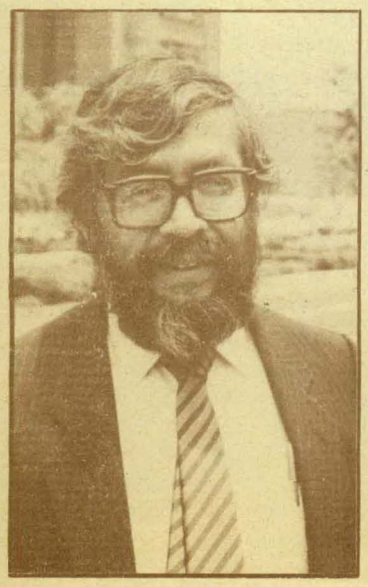
Otra vez, el Narcotráfico

POR MIGUEL ANGEL GRANADOS CHAPA



Hace exactamente un año se inició la mayor operación contra el narcotráfico en nuestro país. Por ella misma, y por sus secuelas, la sociedad mexicana vino a descubrir hasta qué punto México se ha convertido en lugar de paso (**país burro**, se le ha llamado, porque desempeña el papel del transportador, que en la jerga de ese negro oficio así se denomina) hacia el mercado más importante de la droga, que es el de los Estados Unidos.

Mediante informaciones obtenidas por agencias del gobierno de aquel país, policías mexicanos incautaron, a partir del 6 de noviembre de 1984, un gigantesco cargamento de mariguana en el estado de Chihuahua. Meses después, dos de sus consecuencias, de gran importancia, ahondarían la trascedencia de aquel golpe al negocio de los estupefacientes. Por una parte, el agente Enrique Camarena, por cuya información fue posible descubrir aquellos plantíos y bodegones inmensos (donde trabajaban bajo la suculenta oferta de salarios que jamás ganarían dedicándose a trabajos honrados miles de campesinos traídos de regiones pobrísimas del sur del país), fue secuestrado y más tarde asesinado. Su muerte desencadenó una de las embestidas más fuertes contra el narcotráfico, que derivó en la captura de algunos de los más buscados **capos** de la mafia de ese negocio, aunque muchos de ellos estén todavía prófugos, y también en el descubrimiento (o puesta en claro, por mejor decir, porque se ha sabido siempre de ellas) de las ligas entre los delincuentes y las agencias policiacas encargadas de perseguirlos.

A un año de distancia, un nuevo episodio macabro viene a ratificarnos en la idea de que el monstruo del negocio de las drogas no ha sido abatido, y quizá ni siquiera se han cercenado algunos de sus tentáculos principales. El 2 de noviembre, en el suroeste de Veracruz, una tropilla de agentes de la policía judicial federal, de la Dirección Federal de Seguridad (¿no se había dicho que esa oficina se fusionaba con la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales de la Secretaría de Gobernación, para formar una nueva agencia, dedicada a la información de inteligencia, y por lo tanto alejada de las operaciones propiamente policiacas?), así como de la judicial del estado, fue atacada por sorpresa mientras se dirigía a capturar un cargamento de mariguana de cuya existencia había recibido noticia por una delación, y se produjo una atroz matanza que provocó la caída de por lo menos 21 personas (la información era aún imprecisa al anochecer del domingo último, en que este artículo fue escrito), en circunstancias todavía no esclarecidas, pero que probablemente incluyeron una trampa de la que fueron víctimas los agentes policiacos.

Sus cuerpos fueron hallados con huellas de tortura (algunos tenían todavía las muñecas atadas con gruesas sogas), y a algunos de ellos se les destrozó el cráneo mediante un terrible e inexorable tiro de gracia, que es la rúbrica con que los asesinos a sueldo del narcotráfico, o los traficantes mismos, signan sus mensajes de muerte. El que se haya procedido de esa monstruosa manera entraña un formidable desafío a las autoridades, pues sólo puede proceder de una fuerza que se sabe capaz de resistir la persecución militar y judicial que sin duda debería sobrevenir a un acontecimiento de esa naturaleza y de esa magnitud.

El terrible acontecimiento enseña que en Veracruz, donde se han conocido matanzas por otras razones, se ha conjuntado un número de circunstancias que lo ponen en el ojo del huracán de la violencia. Por una parte, ha existido allí de tiempo atrás un clima de criminalidad que lo pone en el triste primer sitio en cuanto a la comisión de muertes con violencia. Se han establecido allí diversos cacicazgos, verdaderos señoríos feudales en que la posesión de armas convierte a las escoltas de los reyezuelos en formidables ejércitos privados para la defensa de intereses económicos que a veces tienen cara legitimada socialmente (como la posesión de vastas extensiones ganaderas, o agrícolas, por ejemplo), pero que a veces están al servicio (como probablemente ocurrió en el crimen múltiple del Día de Muertos), de organizaciones criminales, dedicadas al cultivo y comercialización de estupefacientes.

La impunidad que reina en ese estado para con los caciques, a pesar de que se conozca puntualmente su grado de peligrosidad, deriva en gran medida de la actuación del gobierno del estado, a cuya cabeza está aún el economista Agustín Acosta Lagunes. No hay que exagerar su propia responsabilidad en la creación del clima que priva en la entidad, pero tampoco es dable reducirla. Es verdad, como él mismo ha dicho, que no fue el causante de que la agresividad criminal llegara a la entidad que gobierna, pero sí fue sin duda un factor importante en su incremento. Por un lado, lo fue porque no se trata de un político, capaz de conducir a una colectividad por rutas de trabajo y de progreso, sino de un hombre que llegó al gobierno por un conjunto de circunstancias fortuitas, incluido su propio capricho. Fue bochornoso que en una entidad donde abundan los buenos políticos profesionales se escogiera hace cinco años a un hombre no sólo falto de la experiencia, sino también del tacto necesario para regir una entidad conocida por sus innúmeras complicaciones.

Pero eso tiene menor importancia que el complicado mecanismo de relaciones políticas y económicas que está detrás del negocio de los narcóticos y que aflora de nuevo a raíz de este crimen que no puede ser soslayado, aunque no participe en él como víctima ningún agente de los Estados Unidos ni esté, por consiguiente, a cargo del embajador de Washington la presión suficiente para que sea esclarecido. Aunque sólo fuera por la prepotencia con la que fue perpetrado, los órganos policiacos y judiciales debieran contarlo como un reto del que tienen que salir airosos.

La red que sostiene ese ruin negocio sufrió, en el año que ahora se cierra, probablemente algunas roturas pero dista mucho de haber quedado inservible, como lo pone de manifiesto con brutal contundencia el hecho al que ahora nos enfrentamos. No se ha aclarado de ninguna manera el grado en que autoridades policiacas y políticas estaban involucradas en el manejo de la droga en nuestro país, y de allí proviene, sin duda, aunque sea parcialmente, el ambiente que permite a los asesinos de los 21 agentes mexicanos actuar con gala de poderío y de inverecundia frente a la ley.

No hemos llegado a saber, por ejemplo, qué fue del ex director de la policía federal de seguridad, José Antonio Zorrilla. Al parecer luego de que se le obligó a renunciar a su candidatura a diputado, habría salido a España, prófugo de una persecución que no se le instauró nunca legalmente, por sus eventuales nexos con el narcotráfico. Luego se conjeturó que no habría partido al extranjero jamás, sino que estaría entre nosotros. Dondequiera que se halle, se encuentra protegido por una espesa cortina de discreción y de silencio, que muestra los grados de seguridad que se brinda a quienes tienen que ver con los narcóticos.

De nuevo, una sacudida brutal nos pone a todos frente al desafío del narcocrimen. Así como el terremoto fue la llave que abrió muchos procesos sociales de gran importancia, este crimen monstruoso tendrá que ser el jalón necesario para combatir el negocio de las drogas hasta sus últimas consecuencias.

13/XI/85